



REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial

Auto interlocutorio	427
Radicado	052663103001-2013-00121-00
Proceso	Ejecutivo para la Efectividad de la Garantía Real
Demandante (s)	Gabriel Jaime Montoya Garcés
Demandado (s)	Sandra Liliana Londoño Iglesias
Tema	Niega desistimiento tácito

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
ENVIGADO

Nueve de diciembre del año dos mil veinte

Se procede a decidir sobre la aplicación del desistimiento tácito en este proceso ejecutivo para la Efectividad de la Garantía Real de Gabriel Jaime Montoya Garcés contra Sandra Liliana Londoño Iglesias, previas estas

CONSIDERACIONES:

Dispone el ítem b) numeral 2º del artículo 317 del Código General del Proceso, que si “... el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años”, para decretar el desistimiento tácito.

Parecería sencilla la aplicación de este precepto al caso que nos convoca, sino fuera porque tal disposición encarna una fragante violación al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, pues la parte demandante ya cuenta con una sentencia a su favor, proferida por la jurisdicción y, como tal, debe gozar de inmutabilidad, de total eficacia, en razón de estar provista de presunción de verdad o acierto.

Nuestro máximo Tribunal de Justicia Constitucional, en sentencia C-543 del año 1992, respecto al principio de cosa juzgada, señaló que *“confiere a las providencias la fuerza de verdad legal dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la seguridad jurídica, la cual para estos efectos, reside en la certeza por parte de la colectividad y sus asociados en relación con la definición de los conflictos que se llevan al conocimiento de los jueces”* y que *“no puede haber verdadera justicia sino dentro de un orden que garantice a la sociedad certidumbre sobre el sentido último de las decisiones judiciales, o, como dice RADBRUCH, un “orden superindividual (...) para dotar prácticamente a la vida social de una instancia decisiva”, es decir, la plena conciencia en torno a que los juicios lleguen a su fin mediante resoluciones fijas y estables que precisen el derecho. La actividad de la jurisdicción no puede moverse eternamente en el terreno de lo provisional. El punto final, después de agotados todos los momentos procesales, se erige en factor insustituible de la convivencia, en cuanto implica la consolidación real del criterio de justicia”*.

En esa medida, entonces, la normativa comentada, riñe abiertamente con principios constitucionales como la seguridad jurídica, la justicia, la tutela judicial efectiva y la convivencia pacífica, razón por la cual se impone su inaplicación por contrariar la Carta de Derechos.

En auto 257 del 4 de agosto del año 2015, la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, se pronunció sobre la improcedencia del desistimiento tácito cuando existe sentencia en firma o auto que ordena seguir adelante con la ejecución, de la siguiente manera:

“En Colombia no hay una posición de la doctrina y la jurisprudencia que sea unánime acerca de qué el principio y la garantía de la cosa juzgada pueda operar en los procesos ejecutivos, pues mientras algunos piensan que sí, otros piensan que no, materia que de todas maneras encuentra regulación legal en los artículos 333 y 512 del C. de P. Civil, lo que impone una interpretación sistemática y armónica, vía a través de la cual el Tribunal podrá llegar a la conclusión de que tanto en los procesos ejecutivos en donde no se alegaron excepciones de fondo, como en los que si se propusieron, la decisión interlocutoria o la sentencia que se profiera hará tránsito a cosa juzgada formal y material, siempre y cuando sean de aquellas que decidan situaciones no susceptibles de ser modificadas mediante proceso posterior, ya que expresa autorización de la ley, ora por la naturaleza misma de ellas, o simplemente porque son de las que no pueden resolverse dentro del proceso ejecutivo, porque requieren de un trámite ordinario o las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impida iniciar un proceso posterior.

El artículo 512 del C. de P. Civil prescribe que la sentencia que resuelva las excepciones de mérito hace tránsito a cosa juzgada, excepto en el caso previsto en los numerales 3º y 4º del artículo 333, esto es, las que decidan una excepción de carácter temporal o cuando se profiera un fallo inhibitorio; lo que no traduce que las sentencias que se profieran con base en el artículo 510 del Cpc produzcan apenas efectos de cosa juzgada formal y no material, pues dichos preceptos hay que armonizarlos con el artículo 380 ibídem, que consagra las causales de revisión, mismas que se tipifican como excepciones a la cosa juzgada material, como también lo es hoy día la acción de tutela frente a la vía de hecho, y sin que por ninguna parte aparezca enunciado que las sentencias o los autos que ordenan seguir adelante la ejecución no sean pasibles de dicho recurso bajo el entendido que no participan del principio de cosa juzgada, cuando la verdad es que por anatomía el recurso de revisión es aplicado a los procesos ejecutivos, mismos que no gozan del recurso extraordinario de casación (...).

“(…) el desistimiento tácito frente a los procesos ejecutivos con sentencia ejecutoriada o auto que ordena seguir adelante con la ejecución no es posible, toda vez que existen dos razones de axial importancia, vinculándose la primera con el principio de la cosa juzgada, entendida su cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por lo cual aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, haciendo que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto; y, en segundo lugar, dada la posibilidad que ofrecen los procedimientos ejecutivos que una vez en firme la sentencia, el trámite subsiguiente pueda ser efectuado por ambas extremos de la controversia, así como parte del juez que en virtud de los deberes que le impone un Estado Social y Constitucional de Derecho, ha de ser director del proceso, exceptuándose solamente aquéllos hipotéticos casos en que la actuación procesal esté atribuida en forma exclusiva a la parte ejecutante”.

Analizado el caso bajo estudio, se observa que este proceso tiene providencia que ordena seguir adelante con la ejecución, desde 12 de julio del año dos mil trece, la que hizo tránsito a cosa juzgada, por lo que negará la solicitud elevada por el apoderado judicial del remanentero, empero se le hace saber que el artículo 444 *idem*, indica que “Cualquiera de las partes y el acreedor que embargó remanentes, podrán presentar el avalúo dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o del auto que ordena seguir adelante la ejecución, o después de consumado el secuestro, según el caso. Para tal efecto, podrán contratar el dictamen pericial directamente con entidades o profesionales especializados” (negrilla intencional).

De otro lado, como es de público conocimiento el fallecimiento de la apoderada judicial de los demandantes, en aplicación a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 156 del Código General del Proceso, se decreta la interrupción del proceso y se ordena requerir a la parte demandante para que otorgue poder a un abogado para que represente sus intereses.

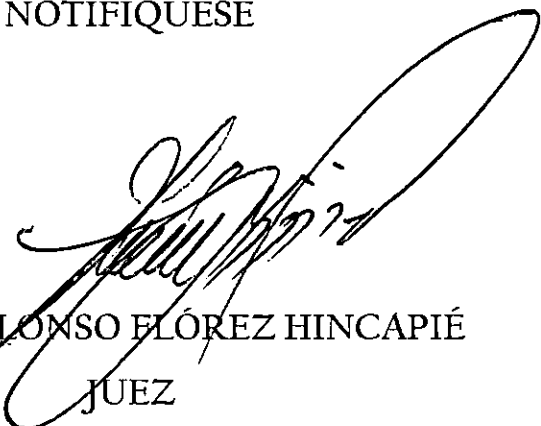
Por lo anteriormente anotado, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Negar la solicitud de terminación por desistimiento tácito correspondiente al proceso de Gabriel Jaime Montoya Garcés contra Sandra Liliana Londoño Iglesias.

SEGUNDO: Interrumpir el proceso, hasta que la parte demandante confiera poder a otro togado.

NOTIFIQUESE


GERMÁN ALONSO FLÓREZ HINCAPIÉ
JUEZ

CERTIFICO

Que el auto anterior fue notificado en estado No. **103**, fijado hoy en la Secretaría del Juzgado a las 8 a.m.

Envigado, DICIEMBRE **10** DE 2020


TATIANA CORRALES RAMÍREZ
Secretario